

Postprint de: Verger, Antoni. “La sociedad civil en el marco de la “Educación Para Todos”: Agendas, estrategias e impactos” en Rambla, Xavier (coord.) La Educación para Todos en América Latina: estudios sobre las desigualdades y la agenda política en educación. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2012 ISBN : 978-84-15295-00-6

La sociedad civil en el marco de la “Educación Para Todos”: Agendas, estrategias e impactos

Antoni Verger

Universidad Autónoma de Barcelona

Mario Novelli

Universidad de Sussex

Introducción

En la actualidad, existe un amplio consenso entre la comunidad internacional de que la educación es un derecho humano fundamental y que, además, contribuye de forma crucial a múltiples dimensiones del desarrollo humano, económico y social. En los años noventa, dicho consenso se escenificó en las Conferencias Mundiales de la Educación realizadas en Jomtien (1990) y Dakar (2000). En estas conferencias, gobiernos, agencias de desarrollo internacional y organismos internacionales se comprometieron formalmente a la consecución del derecho a una educación de calidad para todos y todas (EPT) a escala planetaria (World Education Forum, 2000). En el marco de la Conferencia celebrada en Dakar en el año 2000, se firmó además un *Marco de Acción Global* sobre la EPT en el que se establecieron seis metas educativas que todos los países deberían alcanzar en un plazo de tiempo determinado. Paralelamente, diversas redes de la sociedad civil se organizaron para garantizar que estos compromisos internacionales se traduzcan en prácticas y políticas concretas. Entre estas redes, destaca la Campaña Mundial por la Educación (CME) debido al elevado número de actores que articula, a su alcance global y a ser el interlocutor de la sociedad civil más reconocido en foros y cumbres educativas internacionales en las que se trata la EPT.

La CME se creó a finales de la década de los noventa, en el prelude de la Conferencia de Dakar, con el objetivo de impulsar un programa de acción lo más ambicioso posible. En un primer momento, la campaña congregó a un conjunto de ONG's internacionales de mucho peso (Oxfam, Ayuda en Acción, y Global MarchforLabour) y a la Internacional de la Educación (la federación mundial de

sindicatos de maestros). Con el paso del tiempo, la CME evolucionó y creció hasta convertirse en una organización multi-escalar. Con el objetivo de ir más allá de una lucha meramente ‘global’, promovió la creación de coaliciones de la sociedad civil que defienden el derecho a la educación a escala local, nacional y regional. En el marco de estas coaliciones, organizaciones de naturaleza muy diversa (ONG’s locales e internacionales, sindicatos de maestros, movimientos de defensa de los derechos de los niños, grupos feministas, asociaciones de madres y padres, etc.) se congregan para trabajar de manera coordinada para presionar a los gobiernos nacionales, donantes y organizaciones internacionales para que garanticen una educación de calidad para todos los niños y niñas (Mundy, 2012). Hasta la fecha, la CME cuenta con la participación de 76 coaliciones nacionales y de tres grandes coaliciones regionales (en África, Asia y América Latina). En América Latina, la red regional que representa la CME es la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE). Con sede en Sao Paulo (Brasil), la CLADE cuenta con coaliciones miembro (también llamadas ‘foros nacionales’) en 18 países de la región¹.

El objetivo principal de este capítulo es analizar hasta qué punto y de qué manera las coaliciones de la sociedad civil han tenido la capacidad de contribuir a la expansión y a la mejora de la calidad educativa en diferentes puntos del planeta, con énfasis en países de la región latino-americana. Nuestros argumentos se basan en un proyecto de investigación de carácter comparativo realizado entre los años 2008 y 2011 titulado *Civil society and education: the role and impact of transnational civil society networks in EFA*². En el marco de dicho proyecto, se realizaron estudios de caso sobre coaliciones de la sociedad civil de la CME que operan en siete países: Ecuador, Brasil, Zambia, Ghana, India, Filipinas e Indonesia. A la hora de analizar los estudios de caso, hemos recurrido a teorías de los movimientos sociales, especialmente el enfoque de la estructura de oportunidades políticas (Tarrow, 1994) y el análisis de marcos (Snow y Benford, 2005). Los resultados más detallados del proyecto y los estudios de caso completos que conforman el estudio se pueden consultar en Verger y Novelli (2012).

Este capítulo se estructura en tres secciones principales. En la primera hablamos de la agenda de la sociedad civil en relación a la EPT, y de cuáles son las principales estrategias que llevan a cabo para que los gobiernos respondan a sus demandas. En la

¹ Véase <http://www.campanaderechoeducacion.org/v2/index.php>[Consultado: 12/05/11]

² Véase la descripción del proyecto y los miembros del equipo que lo llevaron a cabo en <http://grupsderecerca.uab.cat/geps/content/2008-2011-0>[Consultado: 12/06/12]

segunda sección, identificamos las diferentes dimensiones de impacto de las coaliciones de la sociedad civil (simbólico, procedimental y político). En la tercera y última sección, nos centramos en algunos de los factores que contribuyen a la consecución de dicho impacto, específicamente, el nivel de cohesión interna y la estructura de oportunidades políticas.

La sociedad civil y la ‘EPT’: múltiples agendas y estrategias

El concepto de “sociedad civil” es muy amplio ya que contempla una gran variedad de tipologías de organizaciones no-estatales como ONG’s internacionales y locales, sindicatos, agrupaciones comunitarias, movimientos de base, centros de investigación independientes, etc. Estas organizaciones abarcan un número muy diferente de miembros y administran cantidades muy dispares de recursos humanos y económicos; algunas de ellas se han institucionalizado y profesionalizado, mientras que otras son más espontáneas y voluntarias; algunas operan en un ámbito territorial internacional, mientras que otras son de ámbito local; unas se centran en la provisión de servicios a la comunidad, mientras que otras a la presión e incidencia política; y así sucesivamente. Dada esta diversidad, el establecimiento de coaliciones de organizaciones de la sociedad civil implica, por lo general, la articulación de ideas, intereses y formas de hacer muy diferentes en un mismo espacio, lo cual no siempre resulta fácil de gestionar.

Las organizaciones de la sociedad civil tienden a agruparse en coaliciones o redes más amplias por diferentes razones, como pueden ser la recaudación de fondos, la provisión de servicios más innovadores, desarrollar iniciativas de investigación conjuntas u organizar una campaña de presión política para defender una determinada causa. Trabajar en coaliciones permite a las organizaciones alcanzar objetivos o implementar iniciativas que de forma individual no podrían llevar a cabo con el mismo grado de éxito. Las coaliciones se constituyen por regla general con el objetivo explícito de influir en las agendas y las decisiones de los gobiernos en relación a una problemática o política sectorial concreta. Este es claramente el caso de las coaliciones de la CME que, como hemos mencionado, surgieron para presionar a los gobiernos y a la comunidad internacional para que cumplan los compromisos establecidos con el marco de acción de la EPT (véase cuadro 1).

Cuadro 1. Las metas de la EPT

1. Extender y mejorar la protección y la educación integrales de la primera infancia;
2. Velar para que en el 2015 todos los niños tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen;
3. Atender las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos;
4. Aumentar de aquí al año 2015 los niveles de alfabetización de los adultos en un 50 por ciento;
5. Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 2005 y lograr para 2015 la igualdad entre los géneros en la educación; y
6. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación.

§

Fuente: World Education Forum (2000)

Las metas de la EPT actúan como un elemento aglutinador, para todas las coaliciones miembro de la CME a la hora de definir sus prioridades y demandas. Sin embargo, dada la dimensión global de la ‘Educación para Todos’, las metas no actúan como una guía de referencia única sino que las coaliciones de la sociedad civil tienden a adaptarlas a las realidades y necesidades particulares de los países en los que operan. Así, en los países menos desarrollados y con problemas educativos más acentuados, los temas y demandas de las coaliciones son menos ambiciosos. Estos se acostumbran a alinear con los Objetivos de Desarrollo del Milenio que, por lo que respecta a la educación, se limitan al objetivo de proveer acceso universal a la educación básica, así como a promover la paridad de género en los sistemas educativos.

En cambio, en los países con mejores indicadores socio-económicos, las coaliciones construyen agendas más amplias y complejas que incluyen temas que van mucho más allá de la EPT. Entre estos temas encontramos pedagogías alternativas, políticas de personal docente, políticas de gestión escolar, indicadores de financiación educativa, etc. Si bien estas agendas reflejan diferentes niveles de desarrollo económico y de necesidades educativas, también reflejan las áreas de especialización y las prioridades de los miembros de las coaliciones. Las coaliciones de América Latina, por lo general, acostumbran a construir agendas más ambiciosas que las que predominan en otras regiones en las que la CME está presente. Por ejemplo, en esta región, el tema de

la educación en primera infancia tiene mucha centralidad, cosa que no sucede en otras regiones (GCE, 2010). De hecho, algo parecido sucede con los gobiernos de la región, muchos de los cuales no se sienten interpelados por el marco de acción de la EPT y persiguen objetivos más ambiciosos como los incluidos en las Metas 2021 de la Organización de Estados Iberoamericanos (véase Rambla en este volumen)

Sin embargo, independientemente de si las agendas de las coaliciones son más o menos ambiciosas o más o menos sofisticadas a la hora de discutir temas de política educativa, hay un elemento común en todas ellas. Entre su menú de demandas, todas las coaliciones de la CME exigen un incremento del gasto público y/o de los recursos que los gobiernos deben destinar a la educación. Así pues, las coaliciones miembro de la CME coincidirían a la hora de considerar que el incremento de los niveles de inversión pública en educación es condición necesaria (aunque no necesariamente suficiente) para mejorar los niveles de acceso, calidad y equidad educativas.

Estrategias

De cara a la consecución de sus demandas, las coaliciones de la sociedad civil que luchan por la EPT implementan una serie de repertorios de acción entre los que destacan: a) Presión política a los tomadores de decisiones (para ello, entre otras cosas, les piden audiencia o les hacen llegar envíos masivos de cartas o correos electrónicos); b) sensibilización de la opinión pública a través de actos públicos, campañas informativas y envío de notas de prensa a los medios de comunicación; c) movilización y acciones de protesta; d) investigación activista y orientada a la denuncia, como el monitoreo del presupuesto educativo y estudios sobre el estado de la educación en el país, entre otros temas. La mayoría de estos repertorios de acción, de una forma u otra, están interrelacionados. Por ejemplo, las acciones de calle (sobre todo si son masivas y/o originales) son una manera eficaz de hacer llegar un mensaje a los tomadores de decisiones o a los medios de comunicación, mientras que el monitoreo del presupuesto educativo puede reforzar los argumentos de las organizaciones de la sociedad civil en el contexto de los actos de sensibilización o de presión política.

La eficacia de los diferentes repertorios de acción está condicionada por el contexto en el que éstos se llevan a cabo. Ello significa que una acción que puede ser muy eficaz en un momento y/o en un lugar determinado puede no ser tan eficaz en el marco de otras coordenadas espacio-temporales. No obstante, a pesar de ser conscientes de las dificultades de generalizar al respecto, los estudios de caso realizados nos

permiten extraer una serie de estrategias de acción colectiva que contribuyen positivamente a que las coaliciones de la EPT logren sus objetivos políticos y educativos.

La **primera estrategia** identificada tiene que ver con los procesos de enmarcamiento del mensaje de las coaliciones. Por ‘emmarcamiento’ entendemos la forma en que los grupos de la sociedad civil construyen y transmiten su mensaje a la sociedad. Este mensaje acostumbra a estar constituido por tres dimensiones principales: la dimensión explicativa, la de pronóstico y la de motivación (Benford y Snow, 2000). Mediante los marcos *explicativos*, los grupos de la sociedad civil definen y construyen una situación como problemática (por ejemplo, demuestran que aquello que afecta a la sociedad o a un grupo social particular no es un fenómeno "natural" y que por lo tanto las cosas podrían ser de otra manera). A su vez, identifican a los principales causantes del problema (sean actores concretos, valores inadecuados, leyes injustas, etc.). A través del *pronóstico*, las redes de la sociedad civil identifican y comunican sus alternativas y soluciones a los problemas diagnosticados, así como las demandas que dirigen a los organismos gubernamentales y a otros grupos de poder. Por último, a través de los marcos de *motivación*, animan a las personas y a los tomadores de decisiones a contribuir a solucionar la situación definida como problemática; para ello, les deben convencer de que el cambio es posible y de que su contribución es fundamental a la hora de hacer realidad dicho cambio.

Por lo que respecta al enmarcamiento del mensaje, aquellas coaliciones de la sociedad civil más exitosas son aquellas que consiguen cierto equilibrio y coherencia entre las tres dimensiones que acabamos de describir. Para que una campaña tenga éxito, se requiere que la explicación de la realidad sea sólida y convincente, que las alternativas propuestas sean congruentes con las causas enunciadas, y que se motive a la población a movilizarse y a contribuir a la solución de los problemas. Así, aquellas coaliciones que proporcionen análisis de la realidad muy convincentes y sólidos, pero que, por ejemplo, no ofrezcan alternativas y soluciones claras (o las alternativas y soluciones que ofrecen no sean lo suficientemente consistentes con el diagnóstico) no serán tan persuasivas y convincentes como las coaliciones que cubren e integran los tres tipos de marcos en su discurso.

Desde el punto de vista del enmarcamiento, se constata también que es más efectivo que el mensaje de las coaliciones combine principios e ideas de carácter más normativo (sobre lo que es justo o no lo es) con ideas de carácter más causal y

científico. Podría decirse que todos los movimientos sociales se articulan alrededor de una serie de principios morales y para luchar contra una situación que es considerada injusta (Keck y Sikkink, 1998). Sin embargo, si los movimientos aspiran a que los responsables políticos les presten más atención, resulta estratégico que respalden también sus afirmaciones en pruebas empíricas y conocimientos técnicos. Así, un mensaje que se articula alrededor de principios morales (por ejemplo, "la educación inicial es un derecho y debe ser accesible para todos los niños/as"), pero que es respaldado por la evidencia ("la investigación realizada por X en los países Y y Z muestra que la educación de la primera infancia contribuye significativamente a mayores niveles de escolarización y aprendizaje en etapas posteriores") es más persuasivo y convincente que un mensaje que únicamente se basa en uno de los dos aspectos.

La coalición de la EPT brasileña (*Campanha Nacional pelo Direito a la Educação*) ha tenido una gran capacidad de estructurar su mensaje en esta línea gracias, en gran medida, a las alianzas estratégicas entre activistas e investigadores críticos que ha sido capaz de establecer. Como resultado de dichas alianzas, la *Campanha* elaboró un indicador, el CAQi (*Custo Aluno Qualidade Inicial*), que permite cuantificar con precisión cuánto costaría garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los brasileños. Dicho indicador se ha convertido en una de las principales contribuciones de la sociedad civil brasileña al debate de política educativa en el país. Dada su consistencia técnica y aplicación práctica, ha penetrado y es ampliamente utilizado en esferas tanto académicas como gubernamentales del país. Incluso la *Secretaria de Educação Básica* del Ministerio de Educación de Brasil ha sugerido homologar el CAQi como "indicador a ser adoptado como referência para ajudar redes e sistemas a planejar em seu orçamento com base mais concreta"³.

La **segunda estrategia** identificada consiste en aprovechar las coyunturas electorales con fines de impacto político. Los períodos electorales abren ventanas de oportunidad política para las coaliciones a la hora de introducir sus demandas en la arena política. Ello es la consecuencia lógica de que los partidos políticos son más receptivos a las demandas ciudadanas en estos períodos. La coalición de la CME del

3

Véase "CAQi: Adoção de customínimo de qualidade ainda está em estudo do MEC" en <http://www.fundabring.org.br/portal/noticias/ano/2011/janeiro/caqi-ainda-esta-em-estudo-no-mec.aspx> [Consultado: 02/05/12]

Ecuador (el *Contrato Social por la Educación*) aprovechó de manera muy hábil una de estas oportunidades. Fue en el marco de las elecciones presidenciales de 2002, cuando organizó una campaña con el lema "Si tu candidato no sabe cómo cambiar la educación, cambia de candidato". El Contrato Social difundió exitosamente esta campaña a través de medios convencionales y no convencionales, y la mayoría de los partidos políticos que disputaban la contienda electoral terminó enfatizando algunas ideas para mejorar la educación en sus programas electorales.

La **tercera estrategia** identificada consiste en diseñar e implementar un plan de comunicación lo más sistemático posible. En una sociedad tan informacionalizada como la actual, los medios de comunicación, aunque también las redes sociales, son un instrumento clave para amplificarlos mensajes de la sociedad civil y, de esta manera, transmitirlos a la opinión pública ya los tomadores de decisiones (McAdam, 2001). La mayoría de las coaliciones analizadas son conscientes de la importancia de contar con los medios de comunicación, así como con otros medios no tan convencionales, para difundir su mensaje. No obstante, debido a las urgencias y exigencias del día a día, muchas de ellas no cuentan con un plan de comunicación bien establecido y se relacionan con los medios de una manera más bien *ad hoc*. En cambio, algunas de las coaliciones analizadas sí cuentan con vínculos sistemáticos con periodistas o representantes de los medios, y con un sitio web muy completo y actualizado. Este es, de nuevo, el caso de la coalición ecuatoriana la cual cuenta con periodistas entre sus miembros así como con acuerdos de colaboración estables con medios de gran tirada en el país (Sarfaty, 2012).

La **cuarta estrategia** identificada es la conocida como justiciabilidad. La justiciabilidad consiste en llevar el gobierno a los tribunales para denunciar el incumplimiento de su obligación legal de garantizar la educación a todos sus ciudadanos. Esta estrategia es sobre todo apropiado en aquellos países con un marco jurídico y una Constitución que consagran el derecho a la educación y con un sistema político independiente. Las coaliciones de la CME de India e Indonesia han participado con cierto éxito en este tipo de iniciativas. Por su parte, CLADE, la Campaña Latinoamericana por la Educación, ha iniciado un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con las violaciones del derecho a la educación en Chile, Haití y Colombia. Esperan, de esta manera, que la resolución de esta Comisión contribuya a que los gobiernos de estos países se vean obligados a poner en práctica mecanismos de financiación concretos para garantizar la educación de

calidad para todos. Esto último es, además, un buen ejemplo del "efecto boomerang" del que nos hablan Keck y Sikkink (1998). El efecto boomerang es una estrategia pluri-escalar por la que una organización de la sociedad civil (cuyas demandas no son escuchadas por el gobierno nacional, o cuyo acceso a los espacios nacionales de deliberación política están bloqueados por el gobierno) activa una organización internacional (o un acuerdo internacional) para ejercer presión política sobre el gobierno de su país de manera más indirecta, aunque no por ello menos eficaz. El efecto boomerang acostumbra a ser efectivo porque los organismos internacionales tienen la capacidad y la potestad de presionar a sus miembros para que cumplan los acuerdos internacionales adquiridos, pero también porque muchos gobiernos quieren evitar ser 'avergonzados' públicamente en el ámbito internacional.

La **quinta estrategia** consiste en dirigir las demandas relativas a financiación educativa al Ministerio de Hacienda o Economía, y no únicamente al de Educación. Todas las coaliciones de la EPT, como se mencionó en el punto anterior, tienen por objetivo conseguir mayores niveles de inversión pública en educación. A menudo, canalizan este reclamo a través del Ministerio de Educación, cuyos representantes no cuentan siempre con el margen de maniobra suficiente para tomar decisiones sobre el presupuesto educativo y, de hecho, muy a menudo, son proclives a contar con más recursos para educación. Sin embargo, es en el Ministerio de Hacienda donde se toman las decisiones importantes sobre los límites financieros para educación y otros sectores sociales. Es más, los ministros de finanzas en la mayoría de países, incluso aquellos con gobiernos progresistas, tienden a priorizar el control de variables macroeconómicas, como la inflación, por encima del gasto en servicios públicos como la educación. Por estas razones, las campañas a favor de la EPT necesitan interpelar al Ministerio de Hacienda de forma más directa.

Encontramos un buen ejemplo de los beneficios de este tipo de estrategia en Brasil. La coalición brasileña organizó una campaña para presionar al gobierno para que aprobara el FUNDEB (*Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação*, un gran fondo económico con el que garantizar la educación básica de calidad para los más pobres del país). En el marco de esta campaña, miembros de la coalición brasileña convocaron a los medios de comunicación y se plantaron ante las puertas de una reunión del gabinete del gobierno para esperar la salida del Ministerio de Hacienda. Nada más salir, miembros de la Campaña pusieron un niño que llevaba puesta una camiseta con el lema "Fundeb, de

verdad!" en los brazos del ministro. Muchos periodistas allí presentes cubrieron la acción dada la imagen tan llamativa y poderosa que ésta les proporcionaba. Así, los medios de comunicación cubrieron la acción ampliamente, y la imagen del niño en los brazos del ministro de Hacienda con el lema "Fundeb, de verdad!" circuló por todo el país. En el año 2007, el Parlamento brasileño aprobó la Ley Fundeb con un presupuesto anual de 30 mil millones de dólares.

En relación a esta última estrategia, cabe tener en cuenta también que, actualmente, la política y la economía se encuentran más globalizadas que nunca y que, como consecuencia de ello, muchas de las decisiones que afectan a la financiación de la educación de los países se toman (o, al menos, son enmarcadas y condicionadas) a nivel supra-nacional (Dale y Robertson, 2007). Por esta razón, por parte de las coaliciones, dirigirse única y exclusivamente al Ministro de Hacienda nacional, no es siempre suficiente. Específicamente, organizaciones internacionales como el Banco Mundial y, sobre todo, el Fondo Monetario Internacional con gran capacidad de incidencia en los presupuestos educativos de muchos países del sur están cada vez más presentes en los procesos de incidencia política impulsados por la CME (GCE, 2009). Sin embargo, todavía hay muchas coaliciones miembro entre las que predomina una aproximación muy 'nacionalista' a los problemas educativos de su país y que, por lo tanto, no suelen contemplar actores y procesos internacionales, ni en sus marcos de significado ni en sus agendas de lucha.

El impacto de la sociedad civil en educación

El impacto de las coaliciones de la sociedad civil en el ámbito educativo tiene una naturaleza multi-dimensional. Como otros estudiosos de los movimientos sociales han observado (véase Giugni et al., 1999, Gomà et al., 2002), en el campo de la EPT, se pueden identificar tres dimensiones de impacto: simbólico, procedimental y político. El impacto **simbólico** consiste en la introducción de cambios en la opinión, en los valores y en las creencias de la sociedad, y de la clase política en particular, respecto una determinada temática. La mayoría de las coaliciones de la sociedad civil son muy activas en el terreno de batalla simbólica e ideacional (Blyth, 2002). Una parte importante de su actividad se destina a producir y/o a difundir conocimientos, a organizar debates y a introducir contenidos en los medios de comunicación con el

objetivo de influir en la opinión pública. Sin embargo, el impacto simbólico es la dimensión de impacto que es más difícil de medir con precisión debido a que las ideas, y el cambio ideacional en particular, son conceptos de naturaleza muy abstracta (Hay, 2002). A pesar de que no sea tan tangible en el corto plazo, para las coaliciones es estratégico invertir tiempo y recursos en la batalla en el campo simbólico debido a que contribuye a abonar el terreno para que se den otro tipo de efectos, como el procedimental y el político.

El impacto **procedimental** se materializa cuando las coaliciones son reconocidas como interlocutores políticos válidos por parte de los tomadores de decisiones. Este tipo de impacto se da, por ejemplo, cuando las coaliciones tienen acceso a órganos consultivos gubernamentales de una manera sistemática y regular. Este es, probablemente, el terreno en el que las coaliciones de la CME han sido más claramente exitosas. Cabe tener en cuenta que, en el caso de las redes de la sociedad civil que luchan por la EPT, este tipo de impacto ha sido favorecido por factores extrínsecos. El consenso internacional en torno a la importancia de la "participación de la sociedad civil" en la ayuda para el desarrollo ha beneficiado especialmente a aquellas coaliciones que operan en los países más dependientes de la ayuda internacional. Este es el caso, por ejemplo, de los países latino-americanos que forman parte de la Iniciativa de la Vía Rápida por la EPT (como Bolivia, Haití y Nicaragua) donde se ha institucionalizado la participación de la sociedad civil dentro de los procedimientos para la elaboración y seguimiento de los 'planes nacionales de educación' que son necesarios para el desembolso de la ayuda. Así, se dan muchos casos en los que los gobiernos de los países más empobrecidos son obligados a contar con la participación de la sociedad civil, les guste o no, como resultado de la condicionalidad de la ayuda (Van der Plaat, 2012). Sin embargo, los efectos de carácter procedimental no se traducen automática ni necesariamente en efectos de carácter substantivo o político. La presencia de representantes de la sociedad civil en reuniones ministeriales o comités de alto nivel puede tener incluso efectos perversos como son cooptar la disidencia o atenuar la dimensión política y de confrontación de los movimientos sociales.

El impacto **político** se materializa en la introducción de cambios tangibles en diferentes áreas de la política educativa, tales como un aumento de la financiación de la educación, cambios en la regulación educativa, introducción de nuevas políticas y prácticas pedagógicas, etc. El análisis de impacto político es metodológicamente complicado debido al conocido como 'problema de la atribución' en los estudios de los

movimientos sociales. Es muy difícil afirmar con certeza que un cambio de políticas determinado es la consecuencia de una acción/demanda de la sociedad civil, o afirmar que las preferencias de los tomadores de decisiones han sido alterados como consecuencia de una campaña de sensibilización concreta de la sociedad civil. El cambio de políticas puede ser consecuencia también de la presión política ejercida por otro actor de la sociedad civil u agente político diferente al que nos ocupa. Por ejemplo, en Brasil, aparte de la Coalición de la CME -la *Campanha pelo Direito un Educaçao* - existe una organización llamada *Todos pela Educacao* que cuenta con el apoyo de importantes empresarios del país y que, de alguna manera, compite con la *Campanha* a la hora de influir al gobierno en materia de políticas relacionadas con la EPT.

Otra cuestión a tener en cuenta a la hora de analizar la influencia de la sociedad civil es que nos podríamos encontrar en una situación en la que las preferencias del gobierno (A) coincidan con las preferencias y demandas de la coalición (B), lo cual es muy distinto a suponer que A es la consecuencia de B. Ahora bien, también hay algunos casos en los que se encuentran evidencias suficientes para disipar las dudas respecto a la atribución de causalidad. Por ejemplo, en 2007, el Consejo Nacional de Educación y Cultura del Parlamento de Brasil otorgó un premio a la *Campanha pelo Direito un Educaçao* por su papel clave en la creación e implementación del FUNDEB. En este caso, existe un reconocimiento oficial y público de la función y el impacto de la sociedad civil que, en gran manera, nos ayuda a resolver el problema de la atribución de causalidad. Sin embargo, se trata de un caso más bien excepcional. En muchos casos, cuando la incertidumbre es mayor, resulta más adecuado considerar que la coalición ha contribuido a un determinado cambio educativo, aunque no haya sido necesariamente su determinante.

En la mayoría de los casos analizados, las coaliciones de la sociedad civil han contribuido a la consecución de nuevos compromisos de financiamiento en educación por parte del gobierno. Entre otros ejemplos de impacto encontramos la creación de nuevos fondos para la educación, el incremento de subvenciones y becas para estudiantes, la introducción de mejoras en los salarios docentes, o la eliminación de costos de matriculación para las familias. Este último tipo de impacto se dio en el Ecuador, donde el *Contrato Social por la Educación* consiguió que se eliminara una cuota educativa de 25\$ que existía en las escuelas del sistema público e impedía el acceso de algunas familias. *Contrato* también participó activamente en la definición del apartado de educación de la nueva Constitución Nacional ratificada en 2008, y

consiguió que el estado aprobara un programa para distribuir almuerzos y libros gratis en las escuelas, entre otros impactos.

Sin embargo, los compromisos sobre financiación educativa logrados por la sociedad civil no siempre han representado un aumento en el gasto educativo total de los países analizados. Por ejemplo, a pesar de contar con una coalición de la sociedad civil fuerte y cohesionada, en Filipinas, el gasto público en educación como porcentaje del PIB ha disminuido del 3,5% en el año 2000 al 2,8% en el año 2008. Lo mismo ha sucedido en otros países con coaliciones muy activas como la India, donde el mismo indicador ha pasado de representar el 4,46% en 1999 al 3% en 2006, o Zambia, donde ha pasado del 1,92% en 1999 al 1,34% en 2008⁴.

Factores que favorecen el impacto de las coaliciones

En este apartado, analizamos dos elementos que están claramente relacionados con los niveles de impacto e incidencia de las coaliciones de la sociedad civil. El primero se refiere al nivel de cohesión interna de las coaliciones, mientras que el segundo se refiere a las estructuras de oportunidad política.

Cohesión interna

No resulta sorprendente que exista una relación positiva entre el éxito 'interno' (o nivel de cohesión interna) de las coaliciones y su éxito 'externo' (o impacto). Sin embargo, el "éxito interno", más allá de un simple factor explicativo, es algo que necesita ser explicado. Nuestra investigación identifica un conjunto de elementos que contribuyen, de forma positiva, al nivel de cohesión interna de las coaliciones de la sociedad civil. Se trata de elementos de naturaleza muy diversa que van desde el nivel micro (por ejemplo, las aptitudes del coordinador nacional de la coalición) al macro (por ejemplo, la historia, el bagaje y tradición de la sociedad civil en el país en cuestión). Una vez más, cabe ser cauteloso a la hora de hacer generalizaciones sobre esta temática, dado que estamos analizando contextos muy diversos. No obstante, es posible identificar patrones recurrentes.

En el marco de coaliciones, el hecho de que los miembros compartan un mínimo de creencias o **ideas fundamentales** funciona como un factor aglutinador muy efectivo.

⁴

Véase UNESCO Institute for Statistics at www.uis.unesco.org/ [Consultado: 05/02/11].

Encontramos, al menos, dos ideas clave que están presentes en todas las coaliciones estudiadas y que son ampliamente compartidas por sus miembros, a saber, «la educación es un derecho humano" y "el Estado es una institución central a la hora de garantizar el derecho a la educación". Las coaliciones de la EPT se acostumbran a componer de decenas de organizaciones muy diferentes y, dada su diversidad, no se puede esperar que todas ellas compartan todo tipo de ideas, valores y preferencias respecto a cuestiones de política educativa u otros temas relacionados con la educación. Sin embargo, sí es de esperar que compartan un conjunto de creencias fundamentales como las que acabamos de mencionar. Dichas creencias tienen que ser estables y no pueden ser impugnadas por los miembros constantemente (Sabatier, 2007). Los miembros pueden enzarzarse constantemente en discusiones sobre ideas secundarias (es decir, sobre ideas no fundamentales), e incluso cambiar sus percepciones y opiniones sobre ciertos temas como consecuencia de dichas discusiones. Pero cuando las creencias fundamentales son desafiadas de manera directa por una parte de sus miembros, las coaliciones no sólo corren el riesgo de perder su nivel de cohesión, sino que incluso su razón de ser.

Otro elemento que favorece el nivel de cohesión interna de las coaliciones se encuentra en la construcción de la agenda a través del **consenso**. Las coaliciones más cohesionadas son aquellas que definen una agenda de demandas, temáticas y objetivos teniendo en cuenta las opiniones y preferencias de todos sus miembros y a través de la deliberación abierta. Este tipo de procedimiento es el más democrático, pero también requiere más tiempo y/o puede abrir más conflictos que otras formas más centralizadas de construir agendas. Por ejemplo, construir agendas tipo "collage", es decir, establecer una agenda mediante la simple adición de las diferentes preferencias e intereses de las organizaciones miembros, es aparentemente más sencillo y menos conflictivo. Las agendas "collage", no obstante, suelen ser muy extensas y dispersas y, como consecuencia de ello, es muy difícil que todos los miembros de las coaliciones se apropien de la agenda en su complejidad. A través del consenso, sin embargo, se pueden construir agendas más bien delimitadas y que cubren temas y objetivos más concretos. De esta manera, los esfuerzos de los miembros pueden estar mucho más focalizados y las posibilidades de lograr impacto político son mayores.

También hemos observado que la construcción de coaliciones cohesionadas es una tarea menos costosa en países donde hay una **historia común** de lucha en el ámbito de la sociedad civil. Este es el caso de países como Brasil y Filipinas, donde los

movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil se han unido en el pasado reciente para luchar de forma intensa contra regímenes dictatoriales. Estas luchas han sucedido hace relativamente poco tiempo y, como resultado de ellas, existen mayores niveles de complicidad y confianza entre activistas provenientes de distintas organizaciones. Además, la memoria de los beneficios de la acción conjunta sigue muy viva. Por lo tanto, la cultura política resultante de este bagaje compartido contribuye a la construcción de coaliciones transversales e intersectoriales, tales como las que han surgido en el campo educativo.

La relación entre los **sindicatos de maestros** y las organizaciones no gubernamentales es potencialmente conflictiva en la mayoría de países y condiciona en gran medida el nivel de cohesión interna y de inclusividad de las coaliciones. La convivencia entre estos dos tipos de colectivos, ONG's y sindicatos, es más fluida en aquellos países en los que no existe un sindicato de maestros único o claramente mayoritario. En la región latinoamericana, donde a menudo se da esta característica de sindicato único, la integración de los sindicatos en coaliciones más amplias es compleja porque, en cierta manera, se puede interpretar como una renuncia a su hegemonía en el campo de la lucha por la educación. También es difícil para muchos sindicatos de personal docente, que cuentan con estructuras y niveles de membresía muy grandes, trabajar con otras organizaciones sociales más pequeñas de una manera totalmente horizontal. Los sindicatos consideran que ellos representan una colectividad grande (miles de maestros, incluso millones, en el caso de algunos sindicatos como los de la India) y no les parece justo que, en el contexto de una coalición, tengan la misma capacidad de toma de decisiones o de voto que una pequeña ONG. Al mismo tiempo, hemos observado también que el nivel de inclusión y de participación de los sindicatos de profesores es mayor en aquellas coaliciones donde hay varias organizaciones diferentes que representan a los maestros (y ninguna de ellas es claramente hegemónica). En estos casos, trabajar en coaliciones puede beneficiar a los pequeños sindicatos a la hora visibilizarse en el campo educativo, así como a la hora de defender los derechos de sus miembros y de negociar con el gobierno con más fuerza. Por otro lado, los sindicatos de maestros a menudo rechazan que las ONG's quieran introducir en la agenda de la coalición temas que son aparentemente sensibles para los derechos de los docentes y su profesionalización, como la rendición de cuentas en las escuelas, los comités comunitarios de participación escolar o la evaluación docente. Finalmente, los sindicatos de maestros, que acostumbran ser grandes defensores de la educación

pública, son recelosos a la hora de trabajar con ONG's que a menudo proveen servicios educativos para los gobiernos o para la comunidad internacional debido a que de esta manera, en mayor o menor medida, contribuyen a privatizar la educación.

La cohesión interna de muchas coaliciones se refuerza por el hecho de contar con un **coordinador** con dotes de mediación e intermediación. El perfil de coordinador más adecuado en el marco de coaliciones tan plurales como las de la EPT es aquel que comprende bien los diferentes intereses y necesidades de los miembros, que evita tomar parte cuando surge un conflicto, y que controla que los miembros no pierdan el foco de la agenda y los objetivos por los que trabajan. Las coaliciones también se benefician de contar con un coordinador que sabe cuándo es el momento de tomar la iniciativa o cuándo es mejor permanecer en la sombra, y que no busca constantemente ser el centro del proceso participativo que gestiona. En muchas ocasiones, el coordinador también tiene que convencer y hacer pedagogía entre los miembros sobre qué significa (y porque tiene sentido) invertir tiempo y recursos en hacer incidencia política. Ello se debe al hecho de que muchas organizaciones que se integran en las coaliciones no tienen siempre un bagaje fuerte en tareas de abogacía o de presión política por lo que acostumbran a necesitar de un cierto acompañamiento, al menos durante un cierto período. Finalmente, el rol del coordinador es clave a la hora de instaurar mecanismos y procedimientos claros para la circulación de la información en el marco de la coalición. Si la información más relevante sobre la coalición (como las actividades que llevan a cabo la secretaría, reuniones y eventos sobre educación que se organizan en el país, decisiones adoptadas por la junta, etc.) no circula correctamente o no se distribuye de forma sistemática es más probable que algunos de los miembros se descuelguen de la dinámica de la red.

Para acabar con esta cuestión, nuestra investigación ha identificado que en muchas coaliciones de la sociedad civil existe un problema de lo que podemos llamar **'identidad colectiva'**. Este problema tiene sus raíces en que muchas organizaciones miembro no cuentan con suficiente 'sentido de propiedad' de la coalición o, incluso, no se identifican con la coalición como tal. A menudo, el discurso de las organizaciones miembros denota una especie de alteridad respecto a la coalición. Concretamente, se habla de la coalición como si ésta se restringiera a la 'secretaría de la coalición' de manera que se confunde una parte con el todo. Esto sucede sobre todo en aquellos casos en que las organizaciones miembro no están suficientemente involucradas en la dinámica de la coalición o se sumaron a la coalición en un momento de auge o por

mimetismo con otras organizaciones, pero sin tener muy claro lo que implica formar parte de este tipo de redes desde el punto de vista del compromiso político.

La mayoría de coaliciones son flexibles por lo que respecta a los diferentes niveles de participación que pueden adoptar sus miembros: desde una participación más pasiva y de consumo de servicios (asistencia a talleres y cursos, firma de declaraciones y manifiestos, etc.) a participar activamente en comisiones de trabajo y/o en la dirección de la coalición. Ahora bien, una vez más, el papel del coordinador y la secretaría puede ser clave a la hora de abrir espacios para la participación de los miembros y para que estos hagan oír su voz a través de diferentes canales. De esta manera, a través de la praxis diaria, se puede fomentar que existan mayores niveles de apropiación y implicación en la coalición.

Estructuras de Oportunidad Política

El impacto y la capacidad de incidencia de las coaliciones que luchan por la EPT es relativo al contexto político en el que éstas operan. Los analistas de movimientos sociales suelen referirse a los factores contextuales y a otras circunstancias de naturaleza política, que habitualmente escapan al control de los actores sociales, mediante el concepto de ‘estructuras de oportunidad política’ (EOP) (Tarrow, 1994). Entre las EOP que favorecen el impacto de las coaliciones de la sociedad civil encontramos: a) una efectiva división de poderes en el Estado, b) una cultura política en el país que sea sensible a la participación de la sociedad civil, y c) el nivel de acceso a las elites políticas. En el caso de las coaliciones que defienden la EPT dada la naturaleza de sus demandas, es más sencillo establecer este tipo de alianzas cuando un partido político progresista se encuentra en el poder. El hecho de que el gobierno sea de ideología progresista abre muchas ventanas de oportunidad para las coaliciones, ya que este tipo de gobiernos está más predispuesto a invertir más recursos en educación. Lo mismo sucede con gobiernos con una agenda de competitividad económica, aunque su lógica para invertir en educación sea diferente a la de los gobiernos de corte progresista. Estos últimos consideran que la inversión en educación pública es importante desde el punto de vista del derecho a la educación. En cambio, los gobiernos orientados a la competitividad invierten en educación porque la conciben como un activo clave a la hora de desarrollar el país económicamente y de atraer inversiones. Ambos tipos de gobierno están más predispuestos a la inversión en educación que, por ejemplo, los

gobiernos que se suscriben a una doctrina neoliberal, cuyo principal objetivo es controlar el gasto público y hacer que el estado externalice el máximo de servicios posible.

En la última década, en América Latina se ha dado un giro político progresista generalizado ya que muchos partidos de izquierda han llegado al poder, a menudo con el apoyo de los movimientos sociales. Este ha sido, en cierta manera, el caso de dos países latinoamericanos incluidos en este estudio como son Brasil y Ecuador. En Brasil, con el Presidente Lula, el gasto público en educación creció de 10% en 2002 al 16,2% en 2006. Algo similar ha ocurrido en Ecuador con el Presidente Correa, quien ha duplicado los salarios del personal docente y ha puesto la educación en el centro de su "Revolución Ciudadana". En ambos países, las coaliciones de la CME están operando en contextos aparentemente muy beneficiosos y sensibles a sus demandas, especialmente por lo que respecta a aquellas demandas que implican un aumento del gasto educativo. Es por eso que, en el nuevo contexto político, tanto la coalición de Brasil como la de Ecuador han tenido que redefinir sus agendas y repertorios de acción de manera estratégica. Por ejemplo, la coalición del Ecuador, *Contrato Social por la Educación*, cuando fue creada contaba con una agenda de demandas muy "materialista" (en otras palabras, se centraba en exigir más recursos para la educación y en intentar que la educación ocupara un lugar más central en la agenda pública). Además, en el momento de su creación, el país atravesaba un largo período de inestabilidad política (Ecuador tuvo diez presidentes en diez años) y un sistema educativo muy fragmentado y debilitado. Dado que Ecuador cuenta hoy con más recursos que nunca en su historia para la educación, *Contrato Social* se ha reinventado y adoptado una agenda más compleja y ambiciosa. Su nuevo programa no está tan centrado en los recursos y más bien aboga por cambios radicales en la gobernanza de los sistemas educativos, así como por la constitución de Ecuador en una "sociedad educativa".⁵

La nueva coyuntura política en Ecuador también ha afectado a la coalición desde un punto de vista más bien político. En sus orígenes, el Contrato Social por la Educación fue promovido por un grupo de personalidades entre las que destacaban empresarios, banqueros y representantes de la iglesia católica. Con el paso del tiempo, el CSE adquirió un perfil más técnico y, en el día a día, la coalición cuenta con la participación de personas con un perfil político más bien progresista. No obstante, los fundadores del Contrato siguen teniendo un papel en la coalición como integrantes del

⁵ Véase www.contratosocialecuador.org.ec/ [Consultado: 08/11/11].

llamado comité promotor. Si bien el comité promotor cuenta hoy con un rol más bien simbólico, su presencia es percibida con preocupación por muchos miembros del Contrato ya que el presidente Correa está enemistado con algunos de los empresarios y banqueros que lo integran; considera que ello les puede restar oportunidades de incidencia política. Como solución, el CSE se está planteando ampliar el grupo promotor de manera que se integren también personas de izquierdas y más afines al actual gobierno (Sarfaty, 2012). El caso de *Contrato* representa un claro ejemplo sobre como el entorno político puede alterar el perfil y la naturaleza de la sociedad civil.

Los medios de comunicación, dada su función política y de creadores de opinión, afectan también las oportunidades de incidencia de las coaliciones. Independientemente de la calidad de la estrategia comunicativa de las coaliciones, su impacto en los medios de comunicación está muy mediado por la atención que los medios prestan a asuntos educativos. Hay países donde la "educación" es un tema muy presente en las agendas de los *media* y donde, por ejemplo, los periódicos más importantes destinan un periodista y/o una sección a la temática (este sería el caso, por ejemplo, de países como Ghana, Brasil y Ecuador). Sin embargo, en otros países, la educación es un tema que es a menudo marginado por los medios (y por la agenda política en general), por lo que las posibilidades de promover el debate educativo por parte de las coaliciones son más restringidas. De los países analizados en nuestro estudio, este último sería el caso de Indonesia e India.

Por último, la opinión pública y los 'sentimientos públicos' (cf. Campbell, 2004) sobre la temática educativa también pueden ayudar o dificultar la realización de las demandas de las coaliciones. Una vez más, la India es un buen ejemplo de cómo estas condiciones puede ir en contra de los objetivos de la coalición. En este país, como consecuencia de un elitismo muy arraigado históricamente en la sociedad, la opinión pública no apoya firmemente la "educación pública" ni el derecho a la educación de todos los niños y niñas (Grant, 2012). Es por ello que en este país es más difícil para la sociedad civil defender la educación pública que en otras zonas del planeta, como la misma región latinoamericana, donde hay un "sentido común" más arraigado alrededor de la idea de la educación como un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el estado. En esta región, lemas como "Educación para Todos" resuenan de forma mucho más positiva en la sociedad lo cual permite a las coaliciones de la sociedad civil adoptar objetivos aún más ambiciosos.

Conclusiones

Las coaliciones de la sociedad civil que luchan por la EPT adoptan formas organizativas y agendas muy diferentes en función del país y del contexto en el que se encuentran. A pesar de ello, casi todas ellas coinciden a la hora de concebir el financiamiento del derecho a la educación como un punto clave en su agenda política. En la región latinoamericana es donde encontramos coaliciones con objetivos más ambiciosos, dado que los indicadores socio-económicos, y el contexto político-ideacional es más favorable a la realización del derecho a la educación que en otras partes del mundo.

Las coaliciones estudiadas han contribuido a introducir cambios muy significativos en el ámbito educativo de los países en los que operan. Dicho impacto se ha producido tanto en el terreno simbólico como en el procedimental y el político. Para alcanzar estos tipos de impacto, acostumbran a desarrollar estrategias originales y disruptivas con las que llamar la atención de la prensa y de los tomadores de decisiones, así como a combinar ideas de carácter científico con principios morales en su discurso político-educativo. A pesar de que la mayoría de coaliciones tienen alti-bajos por lo que respecta a niveles de cohesión e intensidad de su actividad, en general, en relativamente poco tiempo de existencia, se han posicionado de manera muy firme como interlocutores válidos y reconocidos en el debate educativo de sus respectivos países.

Sin duda, las coaliciones de la CME todavía le pueden sacar mucho más rendimiento al hecho de pertenecer a una organización pluri-escalar, pero el simple hecho de estar articuladas a escala global y regional las enriquece de forma importante a través del intercambio de ideas, experiencias y recursos. Si la diversidad de intereses y de organizaciones que caracterizan estas coaliciones es gestionada de forma adecuada, estos nuevos actores de la sociedad civil todavía tendrán mucho camino por recorrer y muchas batallas que luchar en el campo de la EPT.

Referencias

- Benford, R.D. & Snow, D.A. (2000). Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. *Annual Review of Sociology* 26, 611-639.
- Blyth, M. (2002). *Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Campbell, J.L. (2004). *Institutional Change and Globalization*. Princeton: Princeton University Press.
- Dale, R. & Robertson, S. (2007). Beyond Methodological “Isms” In Comparative Education in an Era of Globalisation. En A. Kazamias & R. Cowan (Eds.), *Handbook on Comparative Education*, 19-32. Netherlands: Springer.
- GCE (2009). *Education On The Brink: Will The IMF's New Lease On Life Ease Or Block Progress Towards Education Goals?* Extraído el 22 de noviembre de 2009 desde: <http://www.campaignforeducation.org/en/resource-center/func-startdown/47/>
- GCE (2010). *Real World Strategies – Towards EFA 2015*. Johannesburg: GCE.
- Giugni, M.G., Mcadam, D. & C. Tilly. (1999), *How Social Movements Matter*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Gomà, R., Ibarra, P. y Martí, S. (2002). *Creadores de democracia radical. Movimientos sociales y redes de políticas públicas*. Barcelona: Icaria.
- Grant, L. (2012). National Coalition for Education India: The Second Freedom Struggle Against Illiteracy. En A. Verger & M. Novelli (Eds.), *Campaigning For ‘Education For All’: Histories, Strategies and Outcomes of Transnational Social Movements in Education*. Sense, Rotterdam: 83-100.
- Hay, C. (2002). *Political Analysis: A Critical Introduction*. New York: Palgrave.
- Keck, M.E. & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks In International Politics*. New York: Cornell University Press.
- McAdam, D. (2001). Culture and Social Movements. En [Crothers](#), L. and [C. Lockhart](#) (Eds.). *Culture and Politics: A Reader*. NY: Saint Martin’s Press, pp. 253–68.
- Mundy, K. (2012). The Global Campaign for Education and the Realization of “Education For All”. En A. Verger & M. Novelli (Eds.), 2012. *Campaigning For ‘Education For All’: Histories, Strategies and Outcomes of Transnational Social Movements in Education*. Sense, Rotterdam, pp. 17-30.
- Sabatier, P.A. (2007). *Theories of the Policy Process*. Boulder: Westview Press.

- Sarfaty, J. (2012). Civil Society and Education Advocacy in Ecuador: Building a Social Contract for Education. En A. Verger & M. Novelli (Eds.), *Campaigning For 'Education For All': Histories, Strategies and Outcomes of Transnational Social Movements in Education*. Sense, Rotterdam, pp. 51-64.
- Snow, D.A. & Benford, R.D. (2005). Clarifying the relationship between framing and ideology. En H. Johnston & J.A. Noakes (Eds.), *Frames of protest: Social movements and the framing perspective*. Oxford: Rowman & Littlefield, pp. 205-212.
- Tarrow, S. (1994). *Power In Movement: Social Movements, Collective Action And Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Van der Plaat, F. (2012). Striving for Education for All in Ghana: the role and impact of the Ghana National Education Campaign Coalition. En A. Verger & M. Novelli (Eds.), *Campaigning For 'Education For All': Histories, Strategies and Outcomes of Transnational Social Movements in Education*. Sense, Rotterdam, pp. 65-82.
- Verger, A. & Novelli, M. (2012). *Campaigning For 'Education For All': Histories, Strategies and Outcomes of Transnational Social Movements in Education*. Sense, Rotterdam.
- World Education Forum. (2000). *The Dakar Framework for Action*. Paris: UNESCO.